

**CRÓNICAS
DE LA SALUD**

Inversión pública en I+D+i

ALBERTO ORFAO

En este periodo en el que la economía ha asumido el timón de muchas tomas de decisión, merece una reflexión sucinta en esta columna el efecto de la caída de la inversión pública en investigación biomédica en España. Durante esta travesía prolongada de la crisis, la inversión pública en investigación ha sufrido una importante caída en España, constituyendo uno de los principales factores que contribuyen a poner en riesgo el futuro de la investigación biomédica. Sin embargo, una mirada por los bastidores de la financiación de la

investigación muestra que el efecto de la caída de la inversión pública en investigación tiene consecuencias especialmente negativas en España al verse amplificado por el déficit estructural de la financiación de la investigación, el verdadero problema de fondo.

En primer lugar, los números en España traducen un desequilibrio notable entre la inversión en investigación realizada por el sector público y la adscrita al sector privado, cuyo peso no termina de alcanzar los niveles deseables. En el caso de la investi-

gación biomédica, esto es en parte debido al peso desproporcionado de la industria farmacéutica de carácter multinacional con una inversión en I+D+i en España relativamente limitada, centrada en la demanda de servicios y en los ensayos clínicos, junto a actividades de formación relacionadas con sus productos. A este mapa se une una red incipiente y frágil de pequeñas empresas que asientan su I+D+i en el apoyo tradicionalmente proporcionado por el propio sector público en forma de subvenciones, ahora créditos.

En segundo lugar, merece destacar la financiación intermitente que reciben un porcentaje muy significativo de grupos de investigación, cuya actividad depende de una financiación temporal asociada a proyectos presentados a convocatorias públicas competitivas, en ausencia de una fi-

nanciación estable del grupo o de un estímulo a la captación de financiación alternativa (por ejemplo, privada) con frecuencia infravalorada en los procesos de evaluación. No podemos olvidar tampoco la imputación al cómputo global de inversión en I+D+i de un número creciente de partidas destinadas a actividades colaterales, entre las que se incluyen los costes indirectos, cuyo destino en esta época se ve abocado a cubrir gastos corrientes y de subsistencia de las instituciones receptoras. Finalmente, he entendido prematuro mencionar, entre otros, la escasa tasa de explotación comercial de las patentes o el lobbying que contagia la investigación.

Alberto Orfao es director del Banco Nacional de ADN e investigador del CIC

